

Los empresarios y ETA

Una historia no contada

Juan José Álvarez

Manu Alvarez

Joseba Arruti

Galo Bilbao

Eva Domaika

María Teresa Franco

Víctor Goñi

Ignacio Marco-Gardoqui

Izaskun Sáez de la Fuente

Alberto Surio

Roberto Urkitza

NEREA

Los empresarios y ETA

Una historia no contada

Juan José Álvarez

Manu Alvarez

Joseba Arruti

Galo Bilbao

Eva Domaika

María Teresa Franco

Víctor Goñi

Ignacio Marco-Gardoqui

Izaskun Sáez de la Fuente

Alberto Surio

Roberto Urkitza



Tras una reflexión de los autores del libro y la consulta a varias familias de las víctimas, se ha decidido que el libro no recoja imágenes de los asesinatos cometidos por ETA para evitar causar más dolor a los familiares de las personas asesinadas.

Las fotografías que acompañan los textos pertenecen a los archivos de la Agencia EFE, *Deia*, *El Correo*, *El Diario Vasco* y *Noticias de Navarra*, a los que queremos trasladar nuestro agradecimiento.

© de la edición:

Petronor, 2020

San Martín 5-Edificio Muñatones,
48550 Muskiz (Bizkaia)

y

Editorial Nerea, 2020

www.nerea.net

© de los textos: los autores, 2020

© de las ilustraciones: los autores

Diseño, maquetación y fotomecánica: Eurosíntesis

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de grabación o cualquier otra forma de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org; 91 702 19 70 / 93 272 04 47) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-15042-82-2

Índice

Presentación

Iñigo Urkullu, *Lehendakari*

Somos lo que somos gracias a los empresarios

Emiliano López Atxurra, *Presidente de Petronor*

Contexto histórico y referencias económicas

María Teresa Franco

Los empresarios vascos y ETA: perspectiva político-filosófica

Juan José Álvarez

El impacto económico y social del terrorismo

Ignacio Marco-Gardoqui

Empresariado y extorsión: las víctimas invisibles

Izaskun Sáez de la Fuente; Galo Bilbao

Un freno a la inversión extranjera. Y en eso llegó Daewoo

Manu Alvarez

Álava: GR, el sendero de la extorsión

Eva Domaika

Bizkaia: la soledad de los héroes

Roberto Urkitza

Gipuzkoa: manual de supervivencia

Alberto Surio

Navarra: resistencia a prueba de bombas

Víctor Goñi

ETA juega con blancas

Eva Domaika

Solo ida

Joseba Arruti

Presentación

Iñigo Urkullu, *Lehendakari*

Este libro es una pieza necesaria en la construcción de una memoria crítica de lo padecido en nuestro país como consecuencia del terrorismo y la violencia. Mirando al pasado recordamos lo que no debe volver a ocurrir y, desde ese punto de vista, pensamos principalmente en las víctimas. En esta publicación, este reconocimiento se dirige, en particular, a las víctimas que ETA provocó, mediante el chantaje y la extorsión, entre empresarios y directivos de empresas.

Debemos recordar que, durante décadas, ETA asesinó, hirió, amenazó, extorsionó, secuestró, acosó... Y lo hizo contra distintos colectivos. Uno de ellos fue el vinculado al ámbito directivo-empresarial. No hablamos de una entelequia, sino de historias reales de sufrimiento profundo y prolongado que afectó a personas de carne y hueso y a sus familias. Este recordatorio es solamente el reflejo de un hecho objetivo que no tiene valor suficiente si no va acompañado de una valoración crítica de lo que todo esto supuso.

Nunca nadie debió ser asesinado, herido, secuestrado, extorsionado ni acosado. No hay justificación. Fue radicalmente injusto. Se trata de crímenes que se ampararon en una estructura ideológica perversa que consideró que matar, atacar o extorsionar a un semejante era un medio legítimo para obtener fines políticos.

El terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos fueron posibles porque grupos y personas consideraron que la defensa de una convicción tenía más valor

que la dignidad humana. En el futuro, nunca más, ni una causa política o razón partidaria, ni otra certeza alguna deben situarse, como si fueran un valor absoluto, por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida.

Sus autores, y quienes consideraron que todo ello era lícito, tienen una deuda política: reconocer la injusticia provocada. El mal causado se extiende a toda la sociedad, pero se concentra en el sufrimiento inmenso, radical e irreversible causado a las víctimas y a sus familias. En el caso concreto en que se centra este libro, estamos recordando el daño injusto que padecieron los empresarios y directivos que fueron objeto de lo que, eufemísticamente, fue denominado impuesto revolucionario. Daño injusto que también padecieron directamente sus familias.

El sufrimiento que provocaron aquellas cartas con el sello de ETA que, a lo largo de los años, recibieron varios miles de empresarios y directivos fue específico y especialmente cruel e inhumano. La temida misiva extorsionaba y chantajeaba a su destinatario y a su familia. No solo eso, la lectura de aquella carta dejaba abierta y sin fecha de caducidad una amenaza de muerte indefinida. Una amenaza «sine die» y una amenaza seria que podía llegar a materializarse porque en algunos casos terminó con atentado, secuestro o asesinato.

A partir de ese momento, la vida de esa persona y de su familia cambiaba por completo. La injusticia y el sufrimiento del empresario o directivo amenazado no encontraba descanso. El temor por la propia vida y la angustia por la de los allegados era permanente. El sentimiento de peligro extremo estaba presente todos los minutos y todas las horas de todos los días del año. Y en algunos casos, durante años.

Solemnemente, en nombre del Gobierno Vasco y representando institucionalmente al conjunto de la sociedad vasca, me dirijo como Lehendakari a todas las víctimas de la extorsión y a todos los empresarios y directivos que fueron víctimas de ETA. Deben saber que nada tuvo nunca un valor mayor que el derecho a la vida de cada una de las víctimas.

Deben saber que nada justifica la extorsión, la amenaza ni la vulneración de los derechos humanos que padecieron.

Deben saber que los únicos responsables de estos hechos y de sus consecuencias son sus autores y quienes les impulsaron a ello y lo justificaron. Deben saber que la sociedad vasca conoce y reconoce el sufrimiento injusto que padecieron los empresarios, los directivos y sus familias, y que conoce y reconoce el esfuerzo realizado y su compromiso con este país. Reciban el reconocimiento más sincero, sentido y afectuoso de esta sociedad y de sus instituciones.

Recordamos para hacer este ejercicio de memoria crítica del pasado. Recordamos también para hacer un reconocimiento a sus víctimas que, hasta el momento, no ha sido suficientemente expresado. Y este ejercicio no solo mira al pasado, tiene una importante proyección de presente y de futuro. Al hacer memoria debemos actualizar también aquello que merece ser rememorado y promovido porque supuso un valor positivo y decisivo para la convivencia.

Es necesario recordar que los empresarios vascos y sus familias hicieron un esfuerzo inmenso de resistencia y arraigo. Un esfuerzo por seguir apostando por este país, y por seguir generando empleo y riqueza para esta sociedad. No puede dejar de reconocerse la resistencia democrática del empresariado vasco en un contexto de violencia, división, amenaza y enfrentamiento que, desde el punto de vista personal, familiar y vital fue absolutamente adverso para el compromiso empresarial.

Debe reconocerse el valor de lo positivo. A pesar de todas las adversidades presentes, la vertebración económica, industrial e institucional de la sociedad vasca era fundamental. Continuar comprometidos con el proyecto de cada empresa y con la defensa de sus puestos de trabajo fue un factor decisivo para el presente y el futuro de este país. Fue determinante para preservar la cohesión social, para que el proyecto de Euskadi fuese viable y sostenible, y para que la violencia fuese percibida cada día más como un anacronismo insostenible.

Si de aquellos años algo ha de recordarse y promoverse como un valor positivo, sin duda, deberíamos destacar por su ejemplaridad la resiliencia, el pundonor y el apego a esta tierra que mostró el empresariado vasco. La capacidad de contribuir, a pesar de todo, a la construcción de un país y una sociedad viables.

Hemos hablado del pasado. Hemos recordado para hacer memoria crítica y hemos recordado para hacer un reconocimiento necesario. Debemos mirar también al presente y al futuro. ETA se ha acabado. No ha de tener ni presente ni futuro en nuestra sociedad si no es para el compromiso de no repetición. Tiene una enorme deuda con el pasado. Se ha acabado porque frente a la sinrazón de la violencia ha triunfado la razón de los principios éticos y de los valores democráticos. Ha triunfado la perseverancia y la firmeza en la defensa de esos principios y valores. En esa tarea compartida por muchos sectores, los empresarios y las empresas han jugado un papel muy destacado.

Hemos luchado contra la violencia y por la paz por algo y para algo. Nos ha unido el amor y el apego a esta tierra, a nuestro pueblo. Queríamos la paz para convivir. Ahora la tarea es construir una sociedad cohesionada que es respetuosa con su pluralidad y que es capaz de convivir de forma integrada e integradora. Sin dejar de mirar lo pasado porque no se debe repetir. Miramos al futuro para construir y consolidar una convivencia sana. Estamos convocados a esa nueva tarea que mire a los nuevos retos de la convivencia.

Mis últimas palabras son gracias y esperanza. Gracias al empresariado vasco por su esfuerzo y contribución en esta etapa tan dura y difícil. Esperanza, porque ese es el sentimiento que suscita la mirada al presente y al futuro de nuestra sociedad. Esperanza en el encuentro social, en la convivencia.

Somos lo que somos gracias a los empresarios

Emiliano López Atxurra, *Presidente de Petronor*

Luchar contra la banalidad del mal es lo que hace avanzar a las sociedades. Este libro es una gota de agua en el océano de la memoria de las consecuencias humanas del terrorismo que azotó este país a lo largo de más de cuarenta años. Pone el acento en el mundo empresarial y en su capacidad para sobreponerse a la mafia terrorista, para seguir apostando y, en consecuencia, seguir invirtiendo en el desarrollo tecno-industrial de nuestro país.

Me vienen a la memoria muchos que dieron su vida y, a modo de ejemplo, pongo el acento en Aingeru Berazadi, porque la memoria es corta y la frivolidad del mal nos empuja a olvidarnos de nuestras culpas como sociedad. También recuerdo a tantos otros que fueron asesinados en un entorno social envenenado, donde la suma del terrorismo y la animadversión a la figura del empresario, en una situación de crisis industrial estructural, generaba una niebla oscura y espesa que contaminaba la mentalidad social.

Es el momento de reivindicar el término «empresario» y su figura, porque es la manera de homenajear a tantos jóvenes empresarios que salieron de las escuelas de Armería, de Peritos y de tantas otras... que constituyeron empresas desde la ilusión y el trabajo duro y que, por eso mismo, desde la dignidad de haber construido sus empresas desde la base, fueron capaces

de afrontar un ambiente tóxico —y el riesgo de la amenaza y la muerte— por decir «no» al terrorismo mafioso.

Este proyecto que ahora adquiere forma de libro tiene como misión conocer y reconocer el sacrificio de muchas personas de carne y hueso, que fueron capaces de seguir trabajando y creando riqueza porque no solo tenían ilusión y hambre de futuro, sino que eran personas comprometidas con el futuro de todos nosotros. Ellos hicieron país sin demagogias y discursos vacíos. Hicieron país de la única manera que se puede hacer: trabajando con rigor y estando dispuestos a mantener la llama del trabajo constante y bien hecho en un mercado abierto y altamente competitivo. A ellos les debemos ser una sociedad sólida asentada en el desarrollo tecno-industrial y en niveles de bienestar inimaginables hace cincuenta años. Reconocer el pasado es la única manera de sobrevivir en el futuro.

Y en este recuerdo quiero traer a un primer plano al sostén principal que tuvieron los empresarios en aquel mundo tóxico: sus familias. Este libro es un reconocimiento hacia sus miembros. A tantas María Ángeles, a tantos Andoitz... que, a pesar del sufrimiento, supieron mantener la esperanza en nuestro país y siguieron desde el dolor y la pena mirando hacia adelante y manteniendo el faro del recuerdo con dignidad. Que hicieron posible, en la soledad de la familia, coger las fuerzas necesarias para seguir trabajando y creando riqueza a pesar de la angustia diaria.

Este libro es un sencillo reconocimiento de memoria para que las generaciones futuras sepan que solo desde la dignidad y la lucha diaria se enfrenta uno a las dificultades. Es también un homenaje a todas las personas que, a pesar de los obstáculos, han hecho posible un país como el nuestro, con estándares de bienestar y desarrollo impensables hace apenas dos generaciones. Somos lo que somos gracias a ellos.

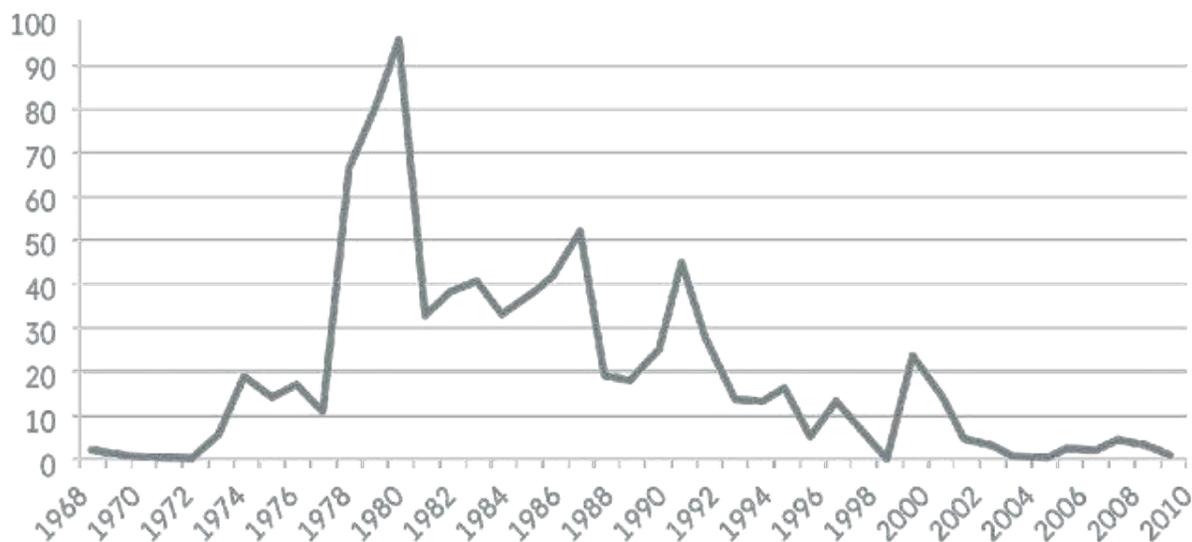
Contexto histórico y referencias económicas

María Teresa Franco

(Bilbao, 1961) es periodista con amplia experiencia en información económica, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como redactora en la delegación del diario *Expansión* en Bilbao. Ha colaborado igualmente con Editorial Prensa Ibérica, así como con diferentes empresas para la elaboración de memorias y reportajes.

La historia del País Vasco cambió para siempre en junio de 1968, a raíz del asesinato a manos de ETA del guardia civil José Antonio Pardines, el primero reivindicado por la banda. Este crimen fue el comienzo de una atmósfera de violencia terrorista que ha marcado la vida de millones de ciudadanos, provocando daños en cerca de 3.600 atentados, con más de 850 víctimas mortales y miles de heridos. Las discrepancias en la adjudicación de algunos delitos impiden la unanimidad en el recuento de las víctimas de ETA y sus grupos afines, por lo que los datos fluctúan desde los 955 asesinatos contabilizados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a las 845 muertes incluidas en el *Informe Foronda* de la Universidad del País Vasco, o las 837 registradas por el Gobierno Vasco. Los números oficiales del Ministerio del Interior elevan los crímenes en España a 853 (854 si se suma el último asesinato de la banda, cometido en suelo francés en 2010), con 6.389 heridos en atentado y decenas de miles de personas amenazadas y exiliadas.

Número de asesinatos de ETA y afines



Fuente: Informe Foronda, 2015.

Desde su nacimiento en 1959, hasta que en octubre de 2011 anunció en un comunicado el cese definitivo de su actividad y el desmantelamiento del «conjunto de sus estructuras», las variaciones estratégicas de la organización terrorista se han visto reflejadas en el número y características de las víctimas. ETA intensificó sus acciones con la llegada de la democracia. Los años previos a la muerte de Franco (1968-1975) concentran cerca del 5 % de los muertos, mientras que la mayor parte de la actividad de la banda, con más del 90 % de los asesinatos, se produce en la fase final de la Transición, con una etapa especialmente mortífera entre 1978 y 1980 que coincide con acontecimientos claves del periodo (referéndum para aprobar la Constitución española en 1978, Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1979 y primeras elecciones autonómicas del País Vasco en 1980). El 70 % de las víctimas mortales se concentraron en el País Vasco y Navarra, seguidas a distancia por Madrid, con un 16 %.

Hasta casi 1995, los muertos son principalmente personas vinculadas a las fuerzas de seguridad o al ejército, objetivos a los que se suma un tercer grupo de civiles acusados por la banda de ser enemigos del pueblo vasco. En este escenario, el sector empresarial fue siempre objetivo preferente como fuente financiera para mantener la actividad terrorista. A partir de mediados de los noventa se advierte una profunda reorientación estratégica centrada en conseguir la independencia del País Vasco mediante la presión política de todas las fuerzas nacionalistas. A este cóctel, ETA añade la llamada *socialización del sufrimiento*, según la cual los efectos del terrorismo no los deben padecer solo las fuerzas de seguridad, sino también los responsables políticos de estas fuerzas. Este cambio de rumbo tiene como consecuencia la victimización de nuevos grupos sociales, tales como jueces, concejales o periodistas, así como una mayor respuesta social contra los crímenes (De la Calle, y Sánchez-Cuenca, 2004). Un ejemplo son los asesinatos de representantes del pueblo (Gregorio Ordóñez en 1995), políticos (Fernando Múgica en 1996) o intelectuales de prestigio (Francisco Tomás y Valiente en 1996). También se cometen secuestros de larga duración, como el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, o el de los empresarios José María Aldaya y Cosme Delclaux.

Según el estudio *Misivas del terror* (2017), investigación impulsada por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, la oposición al terrorismo se expresa minoritariamente en la sociedad vasca durante los años setenta y ochenta, y las víctimas mortales, sus familiares, los amenazados o extorsionados y los que públicamente mostraban su oposición a ETA, soportaron el aislamiento social en un entorno en el que no existían, y por lo tanto no despertaban la atención pública. El *Informe Foronda*, elaborado por la Universidad del País Vasco a instancias del Gobierno Vasco, revela que, durante la Transición, el 76 % de los asesinatos de la banda terrorista carecieron de respuesta en forma de movilización social de protesta (datos de 1979) y lo mismo ocurrió en un 82 % de los

crímenes durante la primera fase de la consolidación democrática (datos de 1984). Por el contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con réplicas en forma de huelgas y manifestaciones. También en los ochenta, un informe solicitado por el Gobierno Vasco calificaba a ETA de «hijo desafortunado de la dictadura», y países vecinos como Francia y Bélgica atenuaban el papel de la banda considerándola una organización que luchaba por la libertad de un pueblo oprimido.

La complicidad social con ETA tuvo además su apoyo en la utilización de un lenguaje que ocultaba la realidad, al denominar «violencia política» al terrorismo, «impuesto revolucionario» a la extorsión, o al evitar utilizar la palabra «secuestro» con el argumento de que a los enemigos de clase se les encierra en la cárcel del pueblo», según recuerda Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Las primeras protestas públicas contra ETA se produjeron en junio de 1978, tras el asesinato del periodista José María Portell. En esta línea destaca el manifiesto de denuncia contra la violencia de la banda y su nula utilidad suscrito en mayo de 1980 por una treintena de personalidades emblemáticas de la cultura vasca, entre las que figuraban José Miguel de Barandiarán, Julio Caro Baroja, Koldo Mitxelena, Gregorio Monreal, Gabriel Celaya, Agustín Ibarrola o José Ramón Recalde. En cuanto al papel de la Iglesia, el periodista y sociólogo Pedro Ontoso, autor de *Con la Biblia y la Parabellum* (2019), señala que «llegó tarde y con muy poca contundencia al sufrimiento de las víctimas de ETA». Estaban con ellas, pero sin gestos públicos que las arropasen como damnificados inocentes.

Gradualmente se abrieron espacios en los que se mostraba un rechazo no ocasional hacia la banda, y a principios de los noventa, la visualización de la reacción social contra ETA se centró en el uso del lazo azul como símbolo contra la organización terrorista, en una campaña impulsada por

organizaciones pacifistas a raíz del secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora (1993). Años después, buena parte del escenario cambió con el asesinato del concejal vizcaíno Miguel Ángel Blanco (1997), crimen que originó una explosión de indignación ciudadana y una marea social contra la banda armada (Castells Arteché, 2017).



El empresario Juan Alcora en mayo de 1980. Fotografía de *El Diario Vasco*.

Empresarios en el punto de mira

La violencia de ETA no empieza y acaba con los asesinatos. Junto a los muertos, el balance de víctimas incluye miles de heridos, secuestrados y extorsionados. Como toda organización terrorista, ETA necesitó un entorno que la sostuviera ideológicamente y, principalmente, desde el punto de vista económico, realidad que desde el primer momento puso en el punto de mira a los empresarios. Así, 33 de las víctimas mortales de ETA eran hombres de negocios, 55 empleados cualificados y 50 autónomos (Alonso, Domínguez, y García, 2010). Por otro lado, y de acuerdo con los datos de López Romo (2015), el 11,7 % de las personas sobre las que la banda recabó información entre 1968 y 2001 pertenecían a estas categorías profesionales. El único colectivo que los supera en número de amenazados es el de políticos del Partido Popular, que suponen un 24 % del total.

Ángel Berazadi, gerente de Sigma, fue en 1976 el primer industrial asesinado por ETA. El último, en diciembre de 2008, fue Inaxio Uria, consejero de la empresa Altuna y Uria, una de las constructoras de la red ferroviaria de alta velocidad vasca. En la lista de empresarios víctimas mortales de la banda figuran también el constructor José Luis Legasa, quien se había negado a pagar el impuesto revolucionario (1978); José Antonio Santamaría (1993), copropietario de una discoteca donostiarra y exjugador de la Real Sociedad; y el también empresario de la construcción Isidro Usabiaga (1996). En 1997 fue asesinado en Tolosa Francisco Arratibel, al que los terroristas acusaban de quedarse con parte del rescate pagado por la liberación del industrial Emiliano Revilla; y en agosto de 2000 un coche bomba acababa con la vida de Joxe Mari Korta, presidente de la patronal guipuzcoana ADEGI. En el periodo de 1968 a 2010, fueron asesinados por motivos de conflictividad laboral Luis Hergueta, directivo de la factoría Michelin de Vitoria (1980), y el

director de la fábrica Moulinex de Usurbil, José María Latiegui (1981).

En general, empresarios, directivos y profesionales no cedieron a la extorsión, pero soportaron en soledad esta amenaza constante durante décadas junto a familiares y amigos. Algunos sufrieron el exilio del País Vasco y Navarra, otros cerraron sus negocios, y la mayoría no contestó a las misivas terroristas. También hubo quienes se significaron públicamente y se expusieron a ser objetivo de la organización terrorista, como el alavés Félix Alfaro Fournier, director del fabricante de naipes Heraclio Fournier, que publicó un escrito en la prensa negándose «a contribuir económicamente» al terrorismo, calificándolo de «contraproducente e inadmisibile» (*El Correo*, 23-11-1976). Años después fue el presidente de Koipe, el guipuzcoano Juan Alcorta, quien mostró su rechazo a pagar en una carta abierta a ETA (*El Correo*, 29-4-1980), o el industrial siderúrgico Luis Olarra, quien para protegerse amenazó a los etarras con tomar represalias (Fernández Soldevilla, 5-2-2018). La mayor parte de los chantajeados lo ocultaron, pero no se doblegaron a la extorsión. Se estima que solo habrían pagado entre el 5 % y el 6 % de los extorsionados en Bizkaia, Navarra y Álava, mientras que en Gipuzkoa el porcentaje podría elevarse al 13 % (Marrodán, 2014).

Estrategia de financiación

La actividad terrorista de ETA no puede desvincularse de una estrategia de financiación destinada a costear sus acciones, mantener su infraestructura y apoyar a los miembros de la banda, tanto a los liberados como a los deportados, refugiados o huidos. Durante años, la lucha antiterrorista dio por segura la existencia de un entramado empresarial que permitía a ETA blanquear el dinero recaudado mediante la extorsión y el chantaje, y en los ochenta las sospechas se centraron en la utilización de una empresa intermediaria de seguros y del

negocio de las tragaperras. Las investigaciones que siguieron a la incautación de los zulos de Sokoa en 1986, y a la detención en 1992 de la cúpula terrorista de ETA en Bidart, sacaron a la luz la trama diseñada por la banda como soporte económico a través de una red que podría haber movido anualmente cerca de 2.000 millones de pesetas (unos 15 millones de euros) y que se extendía desde el País Vasco hasta Cuba, Panamá, Venezuela y Cabo Verde («Historia de ETA», especiales *El Mundo*). La asfixia financiera de la banda continuó con los éxitos en el desmantelamiento de las redes de extorsión durante la década de los noventa y, sobre todo, a través de la creciente vigilancia internacional al estrangulamiento económico de las organizaciones terroristas fruto de la amenaza yihadista.

En los primeros años, ETA se centró en obtener recursos a través de robos en entidades bancarias, para inmediatamente después dar paso a extorsiones y secuestros, poniendo el foco en un colectivo invisibilizado e integrado tanto por grandes empresarios y directivos como por pequeños industriales y todo tipo de profesionales liberales. La violencia sistemática contra este grupo de personas se desarrolló en un escenario político y económico convulso, en un contexto de crisis económica, conflictos laborales y reconversiones industriales que acrecentaron la imagen de un «empresariado estigmatizado y su consideración como enemigo por parte del entramado radical», lo que «desempeñó un papel muy significativo en la justificación social de la extorsión» (Sáez de la Fuente, 2017).

Durante el decenio 1975-1985, Bizkaia y Gipuzkoa retroceden en el *ranking* estatal de la renta. La sobrecapacidad siderúrgica y naval precisa adecuarse a la aparición de nuevos competidores y, en mayor o menor medida, prácticamente todos los sectores, desde la máquina-herramienta hasta la construcción, son víctimas de la crisis del cambio a raíz de la democratización del Estado, la aparición de los sindicatos, la conflictividad social o la liberalización económica. Las empresas cierran o se reestructuran y «la propia figura del